 Defensoría del Consumidor	TRIBUNAL SANCIONADOR	Fecha: 10/04/2019 Hora: 08:20 Lugar: San Salvador	Referencia: 1637-13 Acum.
RESOLUCIÓN FINAL			
Documentos que antecedan:	Por recibido el escrito de fecha 21/9/2018, por medio del cual la Presidencia de la Defensoría, presentó copia certificada del certificado de calibración agregado a folio 95.		
I. INTERVINIENTES			
Denunciante:	Presidencia de la Defensoría del Consumidor.		
Denunciados:	1) ; S.A. de C.V. 2) S.A. de C.V.		
II. HECHOS DENUNCIADOS			
<p>La denunciante expuso que con fecha 11/07/2012, en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 58 letra f) de la Ley de Protección al Consumidor —LPC—, se practicaron inspecciones en el establecimiento denominado , propiedad de la proveedora S.A. de C.V., a efecto de obtener muestras de producto. Como resultado de las diligencias realizadas se levantaron las actas respectivas —folios 3 y 14—, en las cuales se documentó la toma de muestra de los productos denominados , y ambos en su presentación de 113g, marca , distribuidos por , S.A. de C.V.</p> <p>Según se hizo constar en los informes técnicos —folios 6 y 17— y en el informe de «Resultados del plan de verificación de contenido neto en <i>Colados para bebé</i>»,—folios del 7 al 11, y del 18 al 22—, lo constatado arrojó como resultado que en el producto , se encontró que las cinco unidades de la muestra incumplieron la prueba de error promedio del preempacado; y en el producto , se encontró que las cinco unidades de la muestra incumplieron la prueba de error promedio del preempacado, incumpliendo así los requisitos exigidos en los numerales 3.1 y 4.1.1 literal a) del Reglamento Técnico Centroamericano «Cantidad de producto en preempacados» —RTCA 01.01.11:06—.</p>			
III. INFRACCIÓN ATRIBUIDA			
A ambas proveedoras se les atribuye la infracción consignada en el artículo 43 letra f) de la LPC —D.L. N° 776 del 31/8/2005, vigente al momento en que ocurrieron los hechos—, por ofrecer productos en los que no se cumplan las normas técnicas vigentes.			
IV. CONTESTACIÓN DE LAS PROVEEDORAS DENUNCIADAS			
<p>Dentro del plazo de audiencia conferida a las proveedoras, estas contestaron de la siguiente forma:</p> <p>1. En representación de , S.A. de C.V., el licenciado básicamente, alegó que la Defensoría del Consumidor ha impedido a las sociedades infractoras, y particularmente, a su mandante, la posibilidad de verificar que el análisis realizado haya sido de conformidad a las reglas y parámetros establecidos en el RTCA 01.01.11:06, y considera más grave aún el hecho de habersele impedido a su mandante la posibilidad de controvertir y desvirtuar, mediante la prueba idónea, el resultado que ahora se hace contener en el</p>			

informe elaborado por la Defensoría del Consumidor, en razón de lo cual se ha vulnerado el derecho de audiencia y de defensa a su mandante.

2. Ahora bien, en representación de _____, S.A. de C.V., el señor _____ básicamente, alegó que este Tribunal Sancionador incurriría en la violación al principio constitucional de reserva de ley para determinar sanciones, pues sólo mediante ley formal pueden crearse sanciones tales como multas, por lo tanto, las multas con que pretende gravarse a su mandante no están determinadas en ley alguna, sino en una resolución del COMIECO, y en consecuencia, son inconstitucionales. Asimismo, señaló que una variación menor de la cantidad o contenido, sobre todo tratándose de productos de pasta alimenticia, no tiene relación alguna con los temas de las normativas aludidas, es decir, no causará riesgo en la vida, salud o seguridad de las personas.

Por otra parte, agregó que las garantías fundamentales que rigen la producción de la prueba, requieren la participación de la parte imputada en la producción de la misma; pero, señaló que en el presente procedimiento, los inspectores recabaron la muestra, y la Dirección de Vigilancia de Mercados de la Defensoría del Consumidor efectuó el pesaje, evaluación y medición de variaciones, sin haber notificado en ningún momento a su representada.

Finalmente, acotó que existe un término de prescripción de dos años para el ejercicio de la acción, término que en este caso se ha excedido más que racionalmente, y revela que tan sólo busca la intención perversa de sancionar a toda costa, aun cuando los hechos no den lugar a la sanción, o se hayan excedido de manera exagerada los términos de prescripción, y para efectuar una notificación, argumento el cual ya fue resuelto en la resolución de folios 82 a 84.

V. SOBRE VULNERACIONES ALEGADAS

1. Respecto del argumento del apoderado de _____ S.A. de C.V., el artículo 144-A letra b) de la LPC establece que *en el plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de admisión el presunto infractor podrá formular alegaciones y presentar los documentos que estime convenientes, así como proponer la práctica de las pruebas que consideren necesarias*. Asimismo, en relación con lo anterior, la letra c) del referido artículo dispone que *el Tribunal efectuará las actuaciones oportunas y, cuando fuera procedente, ordenará las pruebas que hubiesen sido admitidas*.

En la resolución de inicio del procedimiento, dictada a las 09:56 horas del 21/10/2013 se resolvió en la letra b) del romano II que se citara a las proveedoras para que comparecieran en un plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación —folio 25—, para que formularan alegaciones y presentaran los documentos que estimaran convenientes. Dicha situación pone en evidencia que se concedió el derecho de audiencia a la denunciada con el fin de que aportara la prueba de descargo que considerara pertinente; pero dicha proveedora se limitó a formular alegatos en la referida oportunidad procesal.

2. Ahora bien, respecto del argumento expuesto por el apoderado de _____ S.A. de C.V., relativo a que este Tribunal Sancionador incurriría en la violación al principio constitucional de reserva de ley para determinar sanciones, pues sólo mediante ley formal pueden crearse sanciones tales como multas, debe aclararse que como una consecuencia del principio de legalidad, se encuentra la exigencia de tipicidad del hecho, según la cual a la imposición de toda sanción debe precederle una previsión normativa en la que se describa de manera clara, precisa e inequívoca la

que los distintos proveedores cumplan con lo regulado en la LPC y normativas técnicas, garantizando el respeto a los derechos de los consumidores y el cumplimiento de las normas obligatorias de seguridad, información, etiquetado, calidad, *pesos y medidas* de los bienes y servicios que se comercializan en el mercado, tal como lo establece en el artículo 58 letra j) de la mencionada ley.

Ahora bien, mediante las inspecciones realizadas en los establecimientos, los referidos delegados pueden solicitar muestras de productos a los proveedores para la verificación del cumplimiento de la normativa de protección al consumidor, reglamentos y normas técnicas. De tales muestras, la Defensoría del Consumidor puede realizar los estudios y análisis con la finalidad de comprobar que dicho bien cumpla con todas las disposiciones –legales como técnicas– que le sean aplicables.

Para el presente caso, la Unidad de Seguridad y Calidad de la Dirección de Vigilancia de Mercados de la Defensoría del Consumidor siguió el procedimiento que establece el numeral 4. “Pruebas de referencia para los requisitos metrológicos” del RTCA 01.01.11:06, para verificar el cumplimiento de los productos en cuanto a su contenido neto, según se explica en el informe de fs. 7-11 y 18-22.

De los resultados de la inspección y estudios realizados, los delegados deben informar de dicha situación a la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, que tiene la potestad de presentar la denuncia respectiva, pues de acuerdo a lo establecido en el artículo 143 de la LPC *el procedimiento sancionatorio inicia* -en los casos de intereses colectivos y difusos o al tener conocimiento la Defensoría por cualquier medio- *por denuncia escrita del Presidente de la Defensoría*.

Por tanto, este Tribunal concluye que, en el caso que nos ocupa, no se configura ningún tipo de transgresión a las garantías fundamentales que rigen la producción de la prueba alegada por el representante legal de la proveedora, en el actuar de la autoridad denunciante y sus delegados, puesto que han actuado en ejercicio y cumplimiento de sus atribuciones de inspección y control previamente conferidas por la Ley y, una vez presentada la denuncia por posibles infracciones a la ley, este Tribunal le ha otorgado a los presuntos infractores la oportunidad procesal de controvertir lo planteado en la denuncia presentada por la Presidencia de la Defensoría del Consumidor. Lo anterior, con el fin de que expongan los alegatos de defensa de los hechos que se les atribuyen, junto con la presentación u ofrecimiento de la prueba de descargo oportuna y conducente, que pueda desvirtuar lo consignado en el acta de inspección y en el informe técnico, tal y como lo han hecho a través de sus correspondientes escritos.

VI. ELEMENTOS DE LA INFRACCIÓN ATRIBUIDA

El artículo 27 inciso 1º de la LPC dispone: *En general, las características de los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores, deberán proporcionarse con información en castellano, de forma clara, veraz, completa y oportuna, según corresponda, especialmente en los siguientes aspectos: (...) b) La calidad, cantidad, peso o medida, en su caso, de acuerdo a las normas internacionales, expresadas de conformidad al sistema de medición legal o con indicación de su equivalencia al mismo.* (El resaltado es nuestro). Asimismo, se establece que las exigencias especiales serán determinadas por las normativas de etiquetado, presentación y publicidad aplicables en cada caso.

conducta objeto de prohibición con todos sus elementos configurativos. Dicha previsión normativa, debe respetar también la denominada reserva de ley, que significa en términos generales, la prohibición de regular determinadas materias por medio distinto a la ley formal, entendida como norma emanada exclusivamente de los parlamentos o asambleas.

De manera que, para el ejercicio de la potestad sancionatoria por la Administración pública es necesaria la existencia de una infracción legalmente establecida, es decir, que los hechos imputados se encuentren precisamente calificados como ilícitos en la legislación aplicable. El término "legislación", en materia penal y punitiva, se traduce en el conjunto normativo emanado del órgano con facultad normativa, en la que, por antonomasia, debe regularse la tipificación de las acciones u omisiones objeto de infracción y sanción, lo que implica que ninguna otra norma con rango inferior a la ley (en sentido formal), puede regular por sí misma los supuestos objeto de sanción.

El establecimiento de las conductas constitutivas de infracción y las correlativas sanciones, conforme al principio de legalidad y a la reserva de ley, requieren para su validez la cobertura de una ley formal. Lo anterior implica, que la Administración sólo podrá imponer las sanciones a las que la Ley dé cobertura, y en la forma que la misma lo prescriba.

En el presente caso, a ambas proveedoras se les atribuye la infracción consignada en el artículo 43 letra f) de la LPC —D.L. N° 776 del 31/8/2005, vigente al momento en que ocurrieron los hechos—, por ofrecer productos en los que no se cumplan las normas técnicas vigentes, en ese sentido, no es cierto lo afirmado por el representante de la proveedora S.A. de C.V., en relación a que este Tribunal estaría incurriendo en una violación al principio constitucional de reserva de ley para determinar la sanción, pues como ya se ha mencionado la infracción atribuida se encuentra regulada en el artículo 43 letra f) de la LPC, la cual de configurarse, conllevaría a la aplicación de la sanción establecida en el artículo 46 de la misma normativa.

3. Por otra parte, sobre el argumento relativo a que una variación menor de la cantidad o contenido, sobre todo tratándose de productos de pasta alimenticia, no causará riesgo en la vida, salud o seguridad de las personas, cabe señalar que el perjuicio al bien jurídico tutelado por dicha infracción legal es el derecho a la información —art. 4 letra c) de la LPC—; supuesto normativo que se configura por ofrecer productos en los que no se cumplan las normas técnicas vigentes en relación a las obligaciones que impone la LPC (art. 27). En ese sentido, en virtud del derecho a una información veraz que tiene el consumidor sobre un producto preempacado, y que es dada a conocer a través de una etiqueta, el proveedor debe cerciorarse —en razón de la reglamentación técnica expuesta— que dicha información corresponde y es fiel con lo que realmente se está poniendo a disposición en el mercado, ya que de lo contrario, podría darse el caso que se le esté ofreciendo al consumidor un producto con menor contenido al que consta en la etiqueta del mismo.

Finalmente, respecto al argumento relativo a que la Dirección de Vigilancia de Mercados de la Defensoría del Consumidor efectuó el pesaje, evaluación y medición de variaciones, sin haber notificado en ningún momento a su representada, es menester aclarar que las inspecciones y estudios que son efectuados por los delegados de la Defensoría del Consumidor, son realizados dentro del marco de las facultades que la LPC otorga a la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, que delega dicha atribución con el objeto de velar por que se dé cumplimiento a lo regulado en la legislación de protección al consumidor, por lo que dichas inspecciones y análisis no tienen como objeto el inicio de un futuro procedimiento sancionatorio, sino que el fin perseguido es verificar

Handwritten signature and initials at the bottom of the page. The signature is a stylized 'P' with a circle around it. To its right are the initials 'E' and 'J'.

Dentro de ese contexto, para el caso del contenido neto en productos preempacados en los diversos puntos de fabricación, distribución y comercialización, deben observarse las exigencias y requisitos que establece el RTCA 01.01.11:06.

Y es que cada producto preempacado, previamente envasado o con cierre íntegro debe consignar en su etiqueta el contenido neto en unidades del Sistema Internacional (SI), cuyo dato debe ser veraz, siendo que **la cantidad nominal** —el valor declarado de contenido neto que aparece en la etiqueta— **debe corresponder al valor de la cantidad real** —cantidad que de hecho tiene el preempacado según las mediciones efectuadas por los estudios de metrología legal—, tomando en cuenta las tolerancias que la referida normativa técnica permite, para que de acuerdo al numeral 4.1.1 del RTCA 01.01.11:06, un lote se tenga por aceptado o rechazado, es decir, si cumple o no con la normativa de contenido neto de productos preempacados.

En virtud del derecho a una información veraz que tiene el consumidor sobre un producto preempacado, y que es dada a conocer a través de una etiqueta, el proveedor debe cerciorarse —en razón de la reglamentación técnica expuesta— que dicha información corresponde y es fiel con lo que realmente se está poniendo a disposición en el mercado, en cualquier nivel de distribución (número 3 del RTCA 01.01.11:06), pues caso contrario, el incumplimiento a dicho mandamiento legal, es decir, la falta de correspondencia entre la cantidad nominal y la cantidad real del producto —como resultado de una experticia de metrología—, configura la infracción al artículo 43 letra f) de la LPC (vigente al momento en que ocurrieron los hechos), el cual establecía que era una infracción grave: *Ofrecer bienes en los que no se cumplan las normativas técnicas vigentes*.

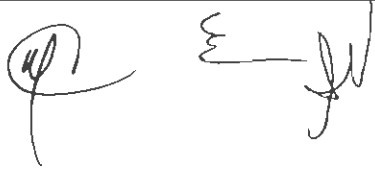
De lo anterior se desprende que dicha conducta ilícita se materializa por **ofrecer** bienes o productos que incumplan con las normas técnicas vigentes. Para el caso en estudio, el término «ofrecer» a que hace reseña la ley, se refiere al hecho de contar con una serie de bienes y productos dentro de un establecimiento con el ánimo de comercializarlos al público consumidor; puede también definirse, como el hecho de tener una diversidad de productos dentro de un establecimiento e invitar al consumidor que los adquiera para su uso o consumo. Partiendo de la anterior premisa, el hecho ilícito tiene lugar cuando dentro de esa variedad de bienes que se ofrecen al consumidor, se encuentran productos que al ser verificados por medio de un análisis de metrología legal respecto de las normas técnicas vigentes, resultan con incumplimientos.

VII. VALORACIÓN DE PRUEBA/HECHOS PROBADOS

1. De conformidad con los arts. 146 de la LPC y 313 del Código Procesal Civil y Mercantil —CPCM— de aplicación supletoria conforme al art. 167 de la LPC, las pruebas oportunas, pertinentes y conducentes aportadas en el procedimiento, serán valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, para determinar los hechos probados relacionados con la infracción al art 43 letra f) de la LPC.

Al respecto, cabe señalar lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la LPC, el cual literalmente establece: *Las actas mediante las cuales los funcionarios de la Defensoría hagan constar las actuaciones que realicen, harán fe, en tanto no se demuestre con prueba pertinente y suficiente su inexactitud o falsedad. El mismo valor probatorio tendrán los informes y otros documentos que emitan los funcionarios y empleados de la Defensoría, en el ejercicio de sus funciones.*

2. Constan en el presente procedimiento los siguientes medios de prueba:



a) Actas para la toma de muestras de cantidad en productos preempacados —folios 3 y 14—, y Facturas de compra número 000007 y 000008, de fecha 11/07/2012 —folios 4, 5, 15 y 16—, con las cuales se establece que —sobre la base de muestreo aleatorio— los delegados de la Defensoría del Consumidor seleccionaron y compraron en el establecimiento denominado propiedad de la proveedora , S.A. de C.V., muestras de los productos «Colado de Frutas Mixtas», y «Colado de Manzana», ambos en su presentación de 113 g., de la marca , fabricados por Delimex de México, S.A. de C.V. (de domicilio de México), distribuidos por , S.A. de C.V. y comercializados por , S.A. de C.V.

b) Informes técnicos —folios 6 y 17— y de «Resultados del plan de verificación de contenido neto en Colados para bebé»—folios 7 al 11, y del 18 al 22— elaborados por la Unidad de Seguridad y Calidad de la Dirección de Vigilancia de Mercados de la Defensoría del Consumidor, donde luego de los análisis de metrología legal, se obtuvieron los siguientes resultados:

Denominación del producto	Marca	Contenido neto nominal	Deficiencia tolerable	Error individual	Hallazgo
S		113g	5.09g	-3.50g	Aceptable
				-4.40g	Aceptable
				-3.70g	Aceptable
				-3.00g	Aceptable
				-4.20g	Aceptable
				-3.76g	Error Promedio
ELM (Error Límite de la Muestra) + EP(Error Promedio)				-2.657	No cumple

Denominación del producto	Marca	Contenido neto nominal	Deficienci a tolerable	Error individual	Hallazgo
		113g	5.09g	-1.90g	Aceptable
				-3.30g	Aceptable
				-2.00g	Aceptable
				-3.70g	Aceptable
				-1.40g	Aceptable
				-2.46g	Error Promedio
ELM (Error Límite de la Muestra) + EP(Error Promedio)				-0.525	No cumple

VIII. ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN DE LA INFRACCIÓN

De los anteriores hechos probados con la prueba documental citada, es preciso establecer entonces, si las conductas denunciadas encajan con los elementos que configura la infracción regulada en el artículo 43 letra f) de la LPC:

A. La acción de ofrecer bienes que no cumplan las normas técnicas vigentes, vincula obligatoriamente el análisis de la normativa técnica vigente y aplicable.

De acuerdo con las actas de folios 3 y 14, el contenido neto que se detalla en la etiqueta de las muestras de analizadas es de 113g; sin embargo los resultados de análisis fueron insatisfactorios en la prueba de requisitos del promedio de preempacados, tal como aparece en las conclusiones de los informes citados.

Al respecto, según el numeral 2.7 del RTCA 01.01.11:06, un Error promedio se define como la suma de los errores individuales de los preempacados, considerando su signo aritmético, dividido por el número de preempacados en la muestras. Y en el número 3.1 de la misma reglamentación técnica, se establece como requisito del promedio, que la cantidad real de un producto preempacado en un lote de inspección debe ser al menos igual a la cantidad nominal.

Ahora bien, para determinar si una muestra de productos cumplen o no con lo exigido en el RTCA 01.01.11:06, han de tomarse en cuenta los criterios del numeral 4.1.1 de dicha normativa técnica, en el que se establece que un lote de inspección es aceptado si cumple y satisface los siguientes parámetros:

- a) Que no existan productos con error promedio;
- b) Que no hayan preempacados no conformes con Error T1; y,
- c) Que se rechace el lote si hay uno o más preempacados no conformes con Error T2.

Finalmente, el mismo numeral 4.1.1 en comento estipula que un lote de inspección debe ser rechazado si no satisface uno o más de los requisitos.

En ese sentido, las muestras de los productos que fueron objeto de análisis no satisfacen la letra a) de los requisitos del artículo 4.1.1 del RTCA 01.01.11:06, por lo que los lotes de inspección deben rechazarse por incumplir con uno o más de los criterios establecidos; en consecuencia, no cumplen con la reglamentación técnica vigente que establece los requisitos de contenido neto en productos preempacados.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y sobre la base de las actas de folios 3 y 14, así como de los informes técnicos y de «Resultados del Plan de Verificación de Contenido Neto en Colados para bebé»—folios 6 y 17, y folios 7 al 11, y del 18 al 22—, documentos que adquieren total certeza por no haber sido desvirtuados por algún medio probatorio de descargo, se concluye que los referidos productos ofrecidos a los consumidores no cumplen la normativa técnica especial para el contenido neto de los productos preempacados, puesto que dichos productos objeto de análisis que eran ofrecidos a los consumidores no están acorde a los criterios y parámetros del RTCA 01.01.11:06, lo cual configura la infracción al artículo 43 letra f) de la LPC.

C. Ahora bien, es necesario analizar la responsabilidad de las denunciadas por la infracción antes mencionada:

1. La proveedora S.A. de C.V. se constituye como distribuidora de los productos, tal como consta en las actas de inspección. En ese sentido, no consta en el presente procedimiento que dicha proveedora ofrezca, ponga a disposición de los consumidores, o comercializa directamente en un establecimiento abierto al público los productos objeto de hallazgo, por lo que su actuar no encaja en la conducta tipo descrita en el artículo 43 letra f) de la LPC, sin perjuicio de su responsabilidad en el cumplimiento de los requisitos metroológicos de los productos preempacados



objeto de análisis, conforme a lo dispuesto en el número 3 del RTCA 01.01.11:06; por tanto, no se establece la responsabilidad de la mencionada denunciada en la referida infracción.

2. La proveedora _____, S.A. de C.V. se constituye como *comercializadora* al detalle de los productos preempacados, tal como consta en las actas de inspección, en virtud de ser ofrecidos los productos objeto de los hallazgos dentro de un establecimiento de su propiedad, conducta que ha sido comprobada y que es objeto de reproche jurídico de acuerdo a la LPC, configurando la infracción al artículo 43 letra f) de la referida ley.

Además, desde el momento en que los productos en cuestión eran ofrecidos a los consumidores en un establecimiento propiedad de la proveedora denunciada, estos debían cumplir imperativamente con las normas técnicas, por lo que es obligación de la comercializadora verificar que los productos preempacados que pondrá a disposición de sus clientes no presenten incumplimientos a la normativa de consumo ni a la reglamentación técnica, y garantizar así que en sus establecimientos solamente se encuentren productos que están aptos para ser comercializados.

Finalmente, si bien no se ha advertido un daño concreto en una persona en particular, debe aclararse que el perjuicio al bien jurídico tutelado por dicha infracción legal es el derecho a la información; supuesto normativo que se configura por ofrecer productos en los que no se cumplan las normas técnicas vigentes en relación a las obligaciones de la LPC. Además, la referida proveedora incurrió en tales inobservancias a la ley y reglamentación técnica por haber actuado de forma culposa, no teniendo el debido cuidado o diligencia para verificar que los productos que ofrece a los consumidores atendieran al referido requerimiento.

IX. PARÁMETROS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN

Habiéndose comprobado que la proveedora _____ S.A. de C.V. cometió la infracción establecida en el artículo 43 letra f) de la LPC, es procedente la imposición de la sanción prevista en el art. 46 de la LPC, según los parámetros establecidos en la ley en mención.

Para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la LPC, debe considerarse que la proveedora es una empresa de gran tamaño, es propietaria del establecimiento inspeccionado — y de un gran número de los mismos en el territorio nacional— en el que se ofrecían y comercializaban los productos preempacados con contenido neto fuera de la normativa técnica vigente y en los que se ha comprobado la infracción al artículo 43 letra f) de la LPC; y por tanto, debió atender las exigencias y requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y normativas técnicas, con la finalidad de asegurarse y poner a disposición de sus clientes productos confiables, tanto en calidad como en cantidad de producto y con información completa, veraz, accesible y oportuna.

Por otra parte, la conducta de la denunciada provoca un detrimento del derecho a la información de los consumidores, e incluso un posible perjuicio económico al adquirir productos con menor cantidad a aquella por la cual pagaron, y se ha valorado que la tutela del bien jurídico protegido en el presente caso es de interés difuso por el daño al derecho a la información veraz, en razón de ofrecer los productos que no cumplían con la reglamentación técnica al superar la deficiencia tolerable para el promedio.

Además, la proveedora incurrió en tal inobservancia a la ley y reglamentación técnica por haber actuado de forma negligente, no teniendo el debido cuidado ni diligencia para verificar que los

productos que ofrece y son puestos a disposición de los consumidores atendieran los referidos requerimientos.

X. DECISIÓN

Por tanto, sobre la base de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 101 inciso 2º, 11 y 14 de la Constitución de la República; 83 letra b), 27, 40, 43 letra f), 46, 49, 97, 146, 147 y 149 de la LPC; y los numerales 3.1 y 4.1.1 literal a) del RTCA 01.01.11:06, este Tribunal **RESUELVE:**

a) Absolver a S.A. de C.V. respecto de la infracción establecida en el artículo 43 letra f) de la LPC.

b) Sancionar a la proveedora , S.A. de C.V., con la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR (\$438.60), equivalentes a dos salarios mínimos urbanos en la industria —según Decreto Ejecutivo N° 56 del 06 de mayo de 2011, publicado en el D. O. N° 85, Tomo 391 de la misma fecha— por la infracción al artículo 43 letra f) de la LPC —D.L. N° 776 del 31/8/2005, vigente al momento en que ocurrieron los hechos—, por ofrecer bienes en los que no se cumplía la normativa técnica vigente, en relación a los numerales 3.1 y 4.1.1 literal a) del RTCA 01.01.11:06.

Dicha multa debe hacerse efectiva en la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación de esta resolución, debiendo comprobar a este Tribunal su cumplimiento dentro del plazo indicado; caso contrario, la Secretaría de este Tribunal certificará la presente resolución para ser remitida a la Fiscalía General de la República para su ejecución forzosa.

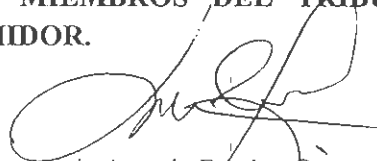
Notifíquese.

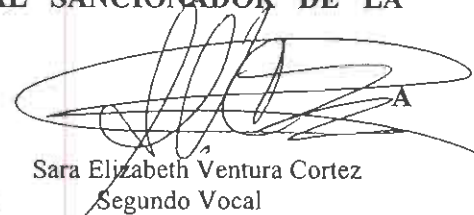
INFORMACIÓN SOBRE RECURSO

De conformidad con lo expuesto en el artículo 167 inciso 3º de la Ley de Procedimientos Administrativos, según el cual: “Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, se regirán en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma.”; en relación con el artículo 158 n° 5 del mismo cuerpo normativo: “La resolución por la que se decida tramitar el expediente mediante el procedimiento simplificado y la resolución que pone fin al procedimiento, no admitirán ningún recurso (...)”.

PRONUNCIADA POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR.


Claudia Marina Góchez Castillo
Presidente


Mario Antonio Escobar Castaneda
Primer Vocal


Sara Elizabeth Ventura Cortez
Segundo Vocal


Secretario Tribunal Sancionador

